

Rancagua, veintiséis de julio de dos mil veintidós.

**VISTOS:**

Comparece Rosa Concha Pérez, abogada, en representación de la parte demandada, quien deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de fecha 7 de mayo de 2022, dictada por la Jueza Destinada del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en sus antecedentes RIT O-540-2021, que acogió la demanda de despido injustificado interpuesta por don Jorge Orellana Donoso y dispuso el pago de prestaciones que indica.

Solicita que, por medio de este recurso se invalide la sentencia referida y se dicte la correspondiente de reemplazo, esgrimiendo para ello las causales dispuestas en los artículos 477 y 478 letra c) del Código del Trabajo, las que alega en forma subsidiaria una de la otra.

Declarado admisible, se procedió a la vista del recurso, quedando la causa en estado de alcanzar acuerdo y producido éste, se procede a dictar el siguiente fallo.

**CONSIDERANDO:**

1° Que la recurrente alega de manera principal, la causal genérica contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, en razón de haber incurrido en infracción de Ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con los artículos 7 y 160 N° 7 del mismo cuerpo legal.

Explicando su recurso, refiere que la sentenciadora interpreta de manera errónea, dándole un alcance diverso al que debió concederle de haber mediado una correcta aplicación de los artículos 19 a 24 del Código Civil.

Precisa que la jueza infringió lo dispuesto en el artículo 7 del Código del Trabajo, ya que interpretó la norma de forma errónea al no considerar la naturaleza de los servicios prestados por el actor y las órdenes e instrucciones que puede dar el empleador, en conformidad a su poder de mando y dirección.

Cuestiona el contenido del considerando décimo tercero, en cuanto refiere que la conducta acreditada del actor de no acatar instrucciones de terceros, no permite configurar la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo. Reclamando al respecto la recurrente que las instrucciones dadas al Sr. Orellana, son impartidas por su empleador



directo, en virtud del contrato de trabajo y en cumplimiento de las obligaciones que este le imponía, atendido el giro de la empresa. Afirma que la magistrada yerra al concluir que las instrucciones dadas al actor fueron dadas por un tercero ajeno a la relación laboral. Asimismo respecto de lo señalado en este considerando, a propósito del contrato de trabajo, plantea la recurrente que las obligaciones incumplidas por el Sr. Orellana se encuentran contenidas en éste.

Continúa su reproche, señalando que también yerra la jueza al interpretar erróneamente el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, que señala *"El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: N° 7: "Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato"*, aseverando al respecto la recurrente, que a todas luces los hechos probados en el juicio conllevan una especial gravedad de los mismos, a saber, el actor fue grosero con los trabajadores del cliente de su empleador, no cumplió órdenes e instrucciones de su empleador, gritó y no respetó turnos de carga y descarga, lo que generó reclamos formales por parte del cliente, puso en riesgo la continuidad del contrato de Agrosuper con su empleador, indica que las conductas repetitivas del actor, probadas en el juicio, son de tal entidad que, en caso de terminar dicho contrato habría perjudicado a su empleadora.

Afirma que esta gravedad, acreditada en el juicio unido a que las instrucciones las dio su empleador directo, configuran de manera irrefutable la causal del Artículo 160 N°7, no obstante, la jueza se niega a interpretar correctamente la norma a la situación concreta.

Concluye que las infracciones antes denunciadas influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues de no haberse incurrido en aquellas, se habría estimado que en este caso el despido fue ajustado a derecho y por ende no corresponde sea condenada su representada al pago de las indemnizaciones a que dio lugar la sentencia.

**2°** Que sobre la base de los mismos antecedentes expuestos precedentemente, la recurrente alega de manera subsidiaria, la causal del Artículo 478 letra c): *"Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de*



*los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior".*

Al respecto refiere en la misma línea de ideas, que se podrá ver que, en el proceso, existe la prueba de los hechos alegados en la carta de aviso, es decir, que hubo maltrato al cliente del empleador, que existieron gritos en contra de los trabajadores del cliente y que incumplió en forma contumaz las instrucciones y órdenes dadas por su jefatura, no obstante, la jueza no le da el carácter de grave.

Reitera sus cuestionamientos respecto del considerando décimo tercero, a propósito de las cláusulas del contrato de trabajo, planteando que se colige claramente que el trabajador ha incumplido gravemente las obligaciones que éste le impone.

Alega que no es efectivo y la jueza yerra al estimar en el motivo octavo, que la carta de despido no cumple cabalmente con la exigencia formal, en cuanto al exponer los hechos se efectúan imputaciones más bien genéricas. Controvirtiendo, la recurrente estima que la carta de aviso se encuentra adecuadamente pormenorizada y asevera que el actor conoce los hechos que motivan su despido y que no lo deja en ninguna indefensión.

Afirma que la prueba que se rindió, documental y testimonial del señor Osorio y del Sr. Cabaña, por sí es suficiente para que la jueza tuviera por acreditada la gravedad de los hechos invocados, es decir, que tuvieron una entidad suficiente para despedirlo.

Indica que en este sentido, el razonamiento jurídico realizado por la jueza al momento de vincular la prueba con los hechos se aparta de la calificación jurídica que debía razonablemente darles, va en contra de la exégesis que debe darse a las normas, no pudiendo perderse de vista las disposiciones de los artículos 19 y siguientes del Código Civil, especialmente aquella que reza: "El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía"

Su conclusión en cuanto a entender que la carta de aviso no se encuentra suficientemente pormenorizada, que los hechos descritos no son representativos de la gravedad necesaria para la configuración de la causal y que las



instrucciones incumplidas por el trabajador no fueron dadas por su ex empleador, se desconecta de los hechos del caso probados en la secuela del juicio y de la prueba aportada.

Finalmente refiere que resulta manifiesto que la jueza no calificó en forma correcta los hechos probados en la causa, no les otorgó la gravedad que estos tienen en esencia, por lo que es necesario que se corrija este error, ya que en la especie resulta absolutamente aplicable el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo al caso concreto.

**3°** Que para un adecuado análisis respecto de las causales enunciadas, resulta útil tener presente las situaciones fácticas que se dieron por establecidas en el fallo recurrido.

Así en la sentencia, luego de la exposición de los medios de prueba incorporados al juicio, la sentenciadora en primer término se refiere a la carta de despido, señalando que, en síntesis, se le atribuye al trabajador que los días 26 de febrero, 24 y 27 de mayo, todos del año 2021, dirigió a trabajadores de la empresa Agrosuper, cliente de la demandada, malos tratos verbales o expresiones consideradas insolentes o groseras. Por otro lado, se expresa que en las dos primeras fechas mencionadas no habría accedido a realizar la devolución de pallets ante las instrucciones dada por el personal del mencionado cliente. Y, por último, se indica que en la última fecha reseñada el actor habría cuestionado y discutido sobre el agendamiento de los programas de carga y descarga del cliente, con el personal de éste, exigiendo que lo descargaran inmediatamente.

De esta forma, analizando el contenido de la carta acompañada al proceso y aquellos que debe cumplir conforme el artículo 162 del Código del ramo, debiendo "expresar la o las causales invocadas y los hechos en que se funda", destaca que en ésta no se cumple cabalmente con la exigencia formal referida anteriormente, porque si bien señala una causal legal de despido, al exponer los hechos se efectúan imputaciones más bien genéricas respecto de que el trabajador supuestamente habría respondido de mala manera o increpado groseramente y con malos tratos verbales, sin dar detalles de las frases o palabras específicamente empleadas. Señala que aquello impide que el Tribunal pueda acceder a una descripción de hechos que permita valorar los mismos y



sus circunstancias a fin de determinar la efectividad de las conductas reprochadas al trabajador y aquilatar la entidad de las mismas, a fin de ponderar si son suficientes para fundar el despido.

Agrega que era carga probatoria de la demandada la demostración de la efectividad de los hechos imputados, para la configuración de la causal legal invocada, pero dada la falencia anteriormente anotada no es posible establecer probatoriamente vocablos o locuciones concretas manifestadas por el trabajador y no es posible comprobar ese acápite de la imputación. Añade que esta carencia formal se reitera en el libelo de contestación, y luego cita el artículo 454 N° 1 inciso segundo del Código del Trabajo, que establece que en los juicios sobre despido, el demandado sólo deberá acreditar la veracidad de los hechos imputados en la respectiva comunicación escrita del despido, no pudiendo alegar hechos distintos como justificativos del mismo.

A continuación analiza uno a uno los hechos imputados en la referida carta. Señalando respecto del primero, supuestamente acontecido el 26 de febrero de 2021, que el actor había sido objeto de amonestación por lo que habría operado a ese respecto el perdón de la causal. Respecto de los hechos imputados correspondientes al día 24 de mayo de 2021, los que habrían acaecido en la planta Miraflores, de Agrosuper, se tiene presente por la jueza, que no compareció testigo presencial de dichos hechos, sino sólo personas que se enteraron por lo informado por el supuesto afectado, pero respecto de las presuntas expresiones verbales proferidas por el actor al personal de dicha empresa, reitera las falencias ya descritas precedentemente, que obstan a la acreditación de hechos. En tanto, respecto a la instrucción de traer pallets en devolución dada por el personal de la empresa cliente al actor, refiere que tampoco hubo claridad probatoria al respecto, pues si bien se expuso el procedimiento de devolución de pallets por uno de los testigos de la parte demandada, ello no se condice con los hechos descritos en la carta despido, ya que se refirió por el testigo Claudio Osorio que dicha devolución era designada de forma aleatoria por la empresa empleadora entre los conductores y que no se les pagaba por dicho traslado, pero en los hechos estipulados en la misiva de desvinculación se



señala que el que dio dicha instrucción al actor era un dependiente de la empresa cliente, sin que se estableciera conforme las probanzas rendidas, que en dicha oportunidad haya sido una instrucción emanada de la empleadora al trabajador de autos, por ello, malamente se pudo establecer la existencia de un incumplimiento de obligaciones del contrato.

A su vez, respecto de los hechos del día 27 de mayo de 2021, resalta que en ellos además de los supuestos malos tratos verbales, respecto de lo que se reitera que no pueden ser objeto de acreditación al no estar suficientemente descritos, tampoco ha comparecido un testigo presencial de ellos y sólo tangencialmente fueron aludidos por los testigos de la demandada, luego lo consignado en forma genérica en los correos electrónicos aportados, emitidos por terceros que no comparecieron al juicio, fueron al efecto mínimos elementos probatorios, además respecto de esta imputación destaca que nuevamente se incurren en descripciones genéricas, pero sin dar mayores detalles de lo ocurrido fácticamente para establecer debidamente los hechos y sus circunstancias, a fin de determinar su entidad y así concluye la sentenciadora que sólo se ha podido establecer, nuevamente, que el actor no ha obedecido las instrucciones recibidas de parte de dependientes de una empresa cliente, respecto de los turnos de carga y descarga.

Siguiendo con el análisis sobre la existencia de incumplimiento de alguna obligación de parte del actor, refiere y analiza el contenido del contrato de trabajo, incorporado en juicio, suscrito entre la demandada y don Jorge Orellana, en lo relevante, el contenido de las cláusula segunda: *"El trabajador se obliga a cumplir las instrucciones de conducción, carga y descarga que le sean impartidas por su jefe, así como cumplir las normas generales que se le indiquen y las disposiciones del presente contrato"*; y por otra parte la cláusula sexta y lo pertinente al Reglamento de higiene y seguridad. A consecuencia del análisis efectuado, la sentenciadora concluye que: *"Conforme a las normas descritas, en la especie no es posible con la conducta acreditada del actor, esto es, no acatar instrucciones de terceros, correspondiente a dependientes de una empresa cliente; dar pábulo para*



*configurar la causal de caducidad de su contrato, prevista en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo. Dado que para configurar la causal en referencia exige el cumplimiento de dos requisitos copulativos, a saber: 1) el incumplimiento de una obligación contractual por parte del trabajador y 2) que éste sea grave, dos exigencias que con el méritos de los antecedentes aportados no ha sido posible dar por comprobadas."*

Precisa, que en lo que respecta a la naturaleza de la obligación infringida, ha de entenderse referida al contrato realidad y por tanto al conjunto de obligaciones y deberes que con ocasión de los servicios prestados establece la ley, la voluntad de las partes y la propia naturaleza del contrato. Estima que del contrato mencionado y en especial de las cláusulas transcritas, relevantes en la presente discusión, no emana una obligación de cumplir las instrucciones de un tercero ajeno al vínculo contractual, como son los dependientes de la empresa Agrosuper.

En cuanto al Reglamento Interno de la empresa demandada, la sentenciadora sostiene, que la transgresión de una obligación y prohibición establecidas en éste, sólo puede acarrear al trabajador la aplicación de las sanciones propias de dicho tipo de instrumento, conforme al artículo 154 en concordancia con el artículo 157 del Código del Trabajo, esto es, amonestación y multa sobre la remuneración diaria, pero no puede provocar la caducidad del contrato, a menos que la obligación y prohibición se encontrara también expresamente establecida en el respectivo contrato de trabajo y de estimarse que estaban comprendidas dentro de la obligaciones esenciales de éste, por lo que no basta que se indique de forma genérica que cualquier infracción al reglamento constituye causal de caducidad, dada la irrenunciabilidad de los derechos laborales, conforme el artículo 5 del Código del Trabajo.

Luego del análisis detallado de la prueba, entonces, la jueza del grado concluye que *"En consecuencia, no se ha acreditado infracción por el actor de alguna obligación que imponga el contrato suscrito por las partes y, por ende, no es posible avanzar en el análisis respecto de la eventual gravedad de los hechos y sus circunstancias, dado que no se ha sorteado favorablemente la primera exigencia."*



Por todo lo anterior procede a acoger la demanda por considerar que en la especie la causal invocada por el empleador fue indebida.

**4°** Que sobre la causal principal; de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo, sólo será procedente el recurso de nulidad cuando la sentencia definitiva se hubiere dictado con infracción de Ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En términos simples la causal de nulidad señalada resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia. Ello puede tener lugar en los casos de contravención formal de la ley, o sea, aquéllos en que el fallo prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso; en los casos de errónea interpretación de la ley, esto es, cuando la sentencia da al precepto legal un alcance diverso a aquel que debía haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación de la ley que se establecen en los artículos 19 a 24 del Código Civil, y en los casos en que hay falsa aplicación de la ley, defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o cuando la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado.

Asimismo, la causal supone por consiguiente que los hechos fijados en el fallo del tribunal a quo resultan inamovibles, de modo tal que los supuestos de procedencia del recurso deberán referirse única y exclusivamente al derecho aplicable.

De esta forma se ha dicho que si el recurso desarrolla la infracción de ley a partir de hechos que no se tuvieron por acreditados en la sentencia o en torno a hechos distintos de aquellos que se han dado por establecidos en el fallo o considerando hechos que no forman parte de los fijados en la resolución impugnada, significaría que el recurso está destinado al rechazo.

**5°** Que de la lectura del recurso, respecto de esta causal, aparece que lo que se cuestiona es el hecho que la sentenciadora estimara que las instrucciones fueron dadas al actor por un tercero ajeno al contrato, alegando que en este





análisis valorativo se infringe el artículo 7° del Código del Trabajo, sin embargo no lo desarrolla conforme la exigencia propia de un recurso de derecho estricto como el que intenta.

De todas maneras, aparece que sus reproches no son reales desde que, del estudio del fallo recurrido, se observa que la sentenciadora al analizar el contrato de trabajo y las obligaciones que de él emanan, específicamente precisa respecto de la naturaleza de la obligación infringida, que ésta ha de entenderse referida al contrato realidad y por tanto al conjunto de obligaciones y deberes que, conforme los servicios prestados, establece la ley, la voluntad de las partes y la propia naturaleza del contrato, asimismo también incorpora en su análisis las facultades de mando y dirección del empleador, y lo relativo al reglamento interno. De tal modo que, no se vislumbra por esta Corte la supuesta infracción de ley en relación a la aplicación de la norma del artículo 7° ya citado. Algo similar acontece respecto de la infracción reclamada en relación al artículo 160 N° 7, dado que la sentenciadora, como se dijera en el considerando tercero de este fallo, luego del análisis pormenorizado de la prueba rendida llega a la conclusión de que no se dan los presupuestos exigidos por dicha disposición legal, ya que estima que no ha existido incumplimiento por parte del actor a las obligaciones impuestas por el contrato y por ende tampoco se estimó acreditado el presupuesto de gravedad al no existir el primero.

Entonces, resulta evidente conforme los términos del recurso, que cuando la recurrente cuestiona infracción de Ley respecto de las normas ya citadas, en realidad está cuestionando el proceso valorativo efectuado por la jueza del grado respecto de la prueba y la determinación de los hechos a que la sentenciadora arriba a consecuencia de este proceso de análisis, del cual discrepa, pretendiendo llegar a otras conclusiones diversas sobre los hechos, aseverando incluso hechos y situaciones que por su parte estima acreditados, procurando con todo ello modificar los hechos que fueron asentados en el fallo, lo que no es posible a través de la causal intentada.

El haber tenido por asentado el tribunal a quo que las



instrucciones emanaban de un tercero ajeno al contrato y que, en el caso en concreto, no se configuraba un incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato de trabajo suscrito entre las partes, en tanto se ha fijado como hecho de la causa, resulta evidente que la nulidad intentada, por la precisa causal invocada, no puede prosperar, por cuanto el recurso aparece así construido contra los hechos de la causa.

6° Que en lo que toca a la causal invocada de manera subsidiaria, esto es, la del artículo 478 letra c del Código del Trabajo, pretende, como ya se dijo, que esta Corte, modifique la calificación jurídica de los hechos y, en tal cometido, se declare que el incumplimiento de obligaciones que por su parte la recurrente estima se acreditó, según explica, sea calificado como grave y, en consecuencia, se rechace la demanda.

7° Que como se advierte, la cuestión pasa por determinar si los mismos hechos que el tribunal dio por establecidos, son susceptibles de una calificación jurídica distinta y, en caso que así fuere, determinar si es posible su encuadramiento en el rango de gravedad que pretende el recurrente y que exige la causal de despido, siempre que tal ejercicio no altere las conclusiones fácticas del fallo;

8° Que como se viene analizando, de la lectura del recurso, respecto de los argumentos para fundar esta causal, se reiteran los planteamientos esgrimidos en relación a la causal principal. Así, se continúa con el reproche respecto de la valoración de la prueba efectuada por la sentenciadora y de los resultados de este ejercicio de análisis. Del mismo modo, la recurrente insiste en plantear diversos hechos y situaciones afirmándolos como acreditados en el curso del proceso, en circunstancias que la sentenciadora precisamente en sus conclusiones no los dio por probados, así como se expone en el considerando tercero de este fallo y de lo razonado a propósito de la causal de nulidad principal, la juez del grado establece determinadas situaciones de hecho ya referidas anteriormente, y específicamente concluye que *"En consecuencia, no se ha acreditado infracción por el actor de alguna obligación que imponga el contrato suscrito por las partes y, por ende, no es posible avanzar en el análisis respecto de la eventual gravedad de los hechos y*



*sus circunstancias, dado que no se ha sorteado favorablemente la primera exigencia.”, conclusión a la que arriba del análisis de la prueba en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica.*

**9°** Que esta causal de nulidad, al igual que la del artículo 477, impone aceptar los hechos asentados en el fallo, lo que implica circunscribir la impugnación a las dimensiones puramente jurídicas del asunto.

**10°** Que revisados los antecedentes al tenor de esta causal, como se viene señalando, no es posible la conversión jurídica que pretende el recurrente, desde que los hechos, tal como han sido establecidos en el fallo, no admiten la mutación que persigue el recurrente, ya que tal pretensión necesariamente importa modificar las determinaciones fácticas establecidas por la sentenciadora, cuestión que no permite la causal impetrada, por lo que se ha de desestimar también este motivo de nulidad.

Con lo razonado y lo dispuesto en los artículos 474, 477, 478, 479, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que, se **RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la abogada Rosa Concha Pérez, en representación de la demandada Transportes Cabo Frío Ltda., en contra de la sentencia dictada con fecha 7 de mayo de 2022, por la Jueza Destinada del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en los autos RIT Nro. O-540-2021, **la que no es nula.**

II.- Que no se condena en costas al recurrente, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese e incorpórese al sistema.

Redacción de la Ministra Suplente Sra. Andrea Urbina Salazar.

**Rol Corte 442-2022 Reforma Laboral.//**

No firma la Ministra Suplente Sra. Urbina, por haber cesado en sus funciones: no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.





DXEXXXPDXTN

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua integrada por Ministro Michel Anthony Gonzalez C. y Abogada Integrante Vivian Lorena Allen G. Rancagua, veintiséis de julio de dos mil veintidós.

En Rancagua, a veintiséis de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

